



SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL
AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO

Medellín, treinta de enero de dos mil veintitrés

20-132

Proceso: **APELACIÓN SENTENCIA**
Demandante: **JORGE ELIECER ARBOLEDA TABORDA**
Demandados: **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y
CONTRIBUCIONES PARAFISCALES- UGPP y JUNTA REGIONAL DE
CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE ANTIOQUIA**
Radicado No.: **05001-31-05-009-2016-01352-01**
Decisión: **REVOCA Y ABSUELVE**

La Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, conformada por los Magistrados **MARÍA NANCY GARCÍA GARCÍA, MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO** y como ponente **ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA**, procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la UGPP contra la sentencia de primera instancia emitida en el proceso de la referencia.

El Magistrado del conocimiento, doctor **ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA**, en acatamiento de lo previsto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, sometió a consideración de los restantes integrantes el proyecto aprobado en Sala virtual mediante **ACTA 02** de discusión, que se adopta como sentencia, en los siguientes términos:

1. SÍNTESIS FÁCTICA Y ANTECEDENTES

1.1 LO PRETENDIDO

Pretende el demandante que tras declarar la nulidad dictamen emitido por la **JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ** No. 0014456 del 3 de febrero de 2005, conforme lo estipula el parágrafo 2º del artículo 16 de la Ley 1562 de 2013, se condene a la **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES- UGPP** al reconocimiento y pago de la pensión de invalidez de origen laboral desde la fecha de extinción de la prestación por parte del ISS-RIESGOS LABORALES, conforme

resolución No. 1386 del 3 de diciembre de 2007, junto con los intereses moratorios, la indexación y las costas del proceso.

1.2. PARA FUNDAMENTAR SUS PRETENSIONES, EN SÍNTESIS, EXPUSO LOS SIGUIENTES HECHOS:

- Que debido a un accidente de origen laboral ocurrido el 21 de diciembre de 1990, el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES- riesgos laborales, le calificó una pérdida de capacidad laboral del 21%, por lo que se le reconoció la pensión de invalidez de origen profesional por medio de la Resolución No. 01248 del 5 de marzo de 1995, de conformidad con el Decreto 3170 de 1964, norma vigente para la época.
- Que mediante dictamen No. 3947 del 28 de junio de 2004 el ISS- Riesgos Laborales lo calificó nuevamente, determinándole una pérdida de capacidad laboral del 15%, el cual fue apelado ante la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia que le asignó una pérdida de capacidad laboral del 17.70%, dictámenes que no se compadecían con su verdadero estado de salud, ya que no le hicieron exámenes diagnósticos ni complementarios, ni realizaron una evaluación integral para determinar el porcentaje correcto de merma de capacidad laboral.
- Que con base en el anterior dictamen, el ISS riesgos laboral mediante resolución No. 1386 del 3 de diciembre de 2007 extinguió su pensión de invalidez de origen profesional, por lo que desde esa fecha, a pesar de ser inválido conforme a las normas que así lo declararon desde 1992, no recibe pensión de invalidez.
- Que con la esperanza que reactivaran su pensión de invalidez de origen profesional, solicitó a COLPENSIONES que se evaluara su pérdida de capacidad laboral, por lo que la entidad a través de dictamen del 5 de diciembre de 2014 le determinó un porcentaje de merma del 31.63% de origen común con fecha de estructuración 3 de octubre de 2014.
- Que la anterior calificación fue superior en 13 puntos porcentuales a la de la Junta Regional que en su momento le determinó un 17.70% de pérdida de capacidad laboral.
- Que el 6 de septiembre de 2015 solicitó a la UGPP la reactivación de su pensión, toda vez que conforme al Decreto 1437 de 2015 las pensiones que estaban a cargo de POSITIVA cuyos derechos fueron causados originariamente en el ISS pasaron a ser administrados por la UGPP.
- Que tiene derecho a que se reingrese a nómina de pensionados de la UGPP en virtud del accidente de trabajo sufrido en 1990 y se reconozca la pensión a partir del 4 de enero de 2008, en la cuantía que había sido reconocida pero indexada a la fecha de pago.

- Que tiene derecho a que se reconozca la pensión en virtud de sus derechos adquiridos con base a las normas que lo declararon inválido, artículo 21 del Decreto 3170 de 1964, o sea con un porcentaje del 20% de capacidad laboral, tal como lo analizó la Corte Suprema de Justicia en sentencia con radicado 26725 de 2006.
- Que como Colpensiones le calificó una pérdida de capacidad laboral superior a la de la Junta Regional de Calificación, a pesar de que fuera de origen común, se debe acoger la más favorable, esto es, el porcentaje superior al 20%, tal como lo ha expresado la Corte Suprema de Justicia en un caso análogo donde ordenó a una entidad reconocer la pensión de invalidez respetando el origen y la fecha de estructuración porque son derecho adquiridos, pues para el caso de revisión, solo se debe analizar la invalidez pues es cosa juzgada pretérita.

1.3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

La **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES- UGPP** se opuso a las pretensiones de la demanda.

Respecto a los hechos aceptó que el actor sufrió accidente de trabajo y que fue pensionado por el ISS- riesgos laborales por habersele calificado una pérdida de capacidad laboral del 21%, la cual posteriormente le fue variada a un 17.70% por la Junta Regional de Calificación de Invalidez, motivo por el cual se extinguió la pensión de invalidez inicialmente reconocida por haber desaparecido las causas que dieron origen.

Indicó que es cierto que en 2014 COLPENSIONES le calificó al actor la pérdida de capacidad laboral, aclarando que de acuerdo con la fecha de estructuración que se determinó se deben cumplir las normas vigentes al 2014 y por tanto requeriría una calificación superior al 50% para ser beneficiario de una pensión de invalidez, precisando que la UGPP solo tiene competencia para asumir prestación de invalidez del antiguo ISS cuando las mismas tengan como origen un accidente de trabajo y no una enfermedad común.

Manifestó que no es cierto que pueda acogerse el dictamen de COLPENSIONES solo respecto al porcentaje, pues el dictamen es uno solo y no puede escindirse a conveniencia del actor, por tanto no puede desconocerse que este dictamen determinó que la fecha de estructuración fue el 2014 y que el origen es común, lo que rompe la conexidad con el accidente de trabajo y la pérdida de capacidad laboral.

Respecto a los demás hechos manifestó que se trata de afirmaciones que encierran una pretensión.

Por su parte la **JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE ANTIOQUIA** también dio respuesta a la demanda, aceptando que calificó al actor en 2007 asignándole una pérdida de capacidad laboral del 17.170%, aclarando que no es cierto que no se haya consultado el verdadero estado de salud del demandante. En cuanto a los restantes hechos manifestó que se trata de apreciaciones subjetivas del actor o que no le constan por lo que deberán probarse.

1.4. DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA

Mediante sentencia proferida el 15 de octubre de 2020 por el Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Medellín, se **DECLARÓ** la nulidad del dictamen emanado de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia el 3 de febrero de 2005 y consecuente con ello, dejó sin efecto las Resoluciones 1190 y 1397 de 2007 emanadas del ISS- ARP.

Como consecuencia de lo anterior **DECLARÓ** el restablecimiento del derecho a la pensión de invalidez que le fuera otorgada al señor **JORGE ELIECER ARBOLEDA TABORDA** mediante Resolución 01248 del 5 de marzo de 1992, a partir de enero de 2008, por lo que **CONDENÓ** a la UGPP a reconocer y pagar al demandante la suma de \$68.394.350 por las mesadas pensionales dejadas de cancelar desde el 6 de septiembre de 2012 hasta el 30 de septiembre de 2020, y a continuar reconociendo la prestación a partir del 1º de octubre de 2020 en cuantía equivalente a \$873.803.

Así mismo condenó a la UGPP a reconocer y pagar los intereses moratorios establecidos en la Ley 776 de 2002 a partir del 7 de enero de 2016.

Finalmente condenó a en costas a las demandadas a favor del actor, fijando las agencias en derecho en la suma de \$4.824.404 a cargo de la UGPP y 2 SMLMV a cargo de la Junta Regional de Calificación de Invalidez.

2. ARGUMENTOS

2.1. ARGUMENTOS DEL JUEZ

Indicó que conforme al Decreto 3170 de 1964, la Ley 776 de 2002, como el artículo 40 de la Ley 100 de 1993, cuando se trate del reconocimiento de la pensión de invalidez de origen profesional y de origen común, precisan que esta será objeto de revisión dentro de las respectivas periodicidades que se han establecido por la Ley, de uno, dos o tres años, dentro de los cuales se debe revisar el porcentaje de pérdida de capacidad laboral. Lo anterior significa que la pensión de invalidez puede ser modificada o extinguida, dado que el estado de salud puede llegar a reestablecerse, lo único que es inmodificable es el origen de la invalidez, siempre y cuando dependa de la misma patología.

En el presente caso se encuentra probado que al demandante le fue otorgada pensión de invalidez de origen profesional mediante Resolución 01248 de 1992 por parte del ISS- Riesgos laborales, de conformidad con el artículo 21 del Decreto 3170 de 1964 por tener una pérdida de capacidad laboral superior al 20%. Así mismo está probado que en el 3 de septiembre 2001 el actor fue objeto de revisión por parte del ISS, donde se determinó que su pérdida de capacidad laboral había disminuido al **14.6%**, dictamen que fue objeto de apelación por la parte actora y la Junta Regional de Calificación mediante dictamen del 14 de marzo de 2002 determinó que el actor tenía una pérdida de capacidad laboral del **21%**, por lo que se le mantuvo el derecho pensional conforme se visualiza a folios 33/34. Sin embargo según se observa a folios 21, el 29 de junio de 2004 el ISS realizó una nueva valoración donde determinó que la pérdida de capacidad del actor disminuyó al 15%, valoración que fue apelada y la Junta Regional de Calificación de Invalidez estableció que el porcentaje de pérdida de capacidad laboral era del 17.70%, por lo que a través de Resolución No 1386 de 2007 se extinguió la pensión de invalidez que le había sido reconocida al demandante, dado que la pérdida de capacidad laboral es inferior al 20%.

Agregó que el 5 de diciembre de 2014 COLPENSIONES por solicitud del actor, se le realizó una nueva calificación, donde solo se tienen en cuenta las patologías ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA y la HIPERTENSIÓN ARTERIAL, pero no tiene en cuenta la lesión L3 de la columna vertebral que era la que había originado la pensión de invalidez, incluso se califica un porcentaje del 31.63% de origen común con fecha de estructuración 3 de octubre de 2014, aclarando que para efectos de esta calificación solo se tuvo en cuenta la patología respiratoria, ya que la discopatía y dolor lumbar es secundario a fractura antigua ya calificada e indemnizada por riesgos laborales. Adujo el a quo que este dictamen había sido objeto de apelación y la Junta Regional de Calificación a folio 34 en valoración del 2 de marzo de 2014 determinó que el actor

tenía una pérdida de capacidad laboral del 21% con fecha de estructuración 19 de noviembre de 1991 de origen profesional.

Por tanto, consideró el a quo que, con base en esta calificación de la Junta de 2014, al demandante se le restableció el derecho o nunca lo perdió, por tanto como al actor se le está es revisando el estado de invalidez se debe remitir a la normatividad anterior es decir, el Decreto 3170 de 1964, por lo que el actor tiene derecho a la UGPP le continúe reconociendo la pensión de invalidez de origen profesional.

En consecuencia declaró la nulidad del dictamen de la Junta Regional de Calificación de Invalidez del 3 de febrero de 2005 y dejó sin efecto las Resoluciones 1190 y 1397 de 2007 emanadas del ISS- ARP, condenando a la UGPP, conforme con el Decreto 1437 de 2015, al restablecimiento de la pensión de la pensión de invalidez que le fuera otorgada al demandante mediante Resolución 01248 del 5 de marzo de 1992, a partir de enero de 2008, dado que las mesadas anteriores se encuentran prescritas. Finalmente condenó a la UGPP a pagar los intereses moratorios consagrados en la Ley 776 de 2002 a partir del 7 de enero de 2016 y hasta la fecha de pago efectivo.

2.2. RECURSO DE APELACIÓN UGPP

Adujo que si bien se declaró que la nulidad del dictamen realizado por la Junta Regional de Calificación de Invalidez del 3 de febrero de 2005, conforme lo estipula el artículo 16 de la ley 1562 de 2013, se hizo con base en un dictamen de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia, entidad que no tiene competencia pensional, además conforme los artículos 41 y ss de la Ley 100 de 1993 no se acredita el porcentaje de pérdida de capacidad laboral que le permita cumplir los requisitos para acceder a la pensión de invalidez, por lo que la UGPP no está obligada al reconocimiento y pago de la pensión de invalidez .

De otro lado manifestó que la parte actora en sede administrativa no logró demostrar la pérdida de la capacidad laboral para el reconocimiento de la pensión de invalidez y por tanto no debe condenarse en costas ni intereses moratorios a la UGPP, dado que la entidad no podía conceder una prestación cuando no se acreditaban los requisitos para ello.

2.3. ALEGATOS

Ninguna de las partes presentó alegatos.

3. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA JURÍDICO EN ESTA INSTANCIA

Consiste en determinar si fue acertada la decisión del a quo de declarar la nulidad del dictamen emitido por la JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ el 3 de febrero de 2005 y dejar sin efecto las Resoluciones 1190 y 1397 de 2007 emanadas del ISS- ARP, ordenando el restablecimiento del derecho a la pensión de invalidez que le fuera otorgada al señor JORGE ELIECER ARBOLEDA TABORDA mediante Resolución 01248 del 5 de marzo de 1992.

Igualmente se revisará en CONSULTA los temas que no fueron apelados y que le fueron adversos a la UGPP con el fin de salvaguardar los intereses del Estado como garante de esta entidad, conforme a lo señalado por nuestro órgano de cierre en sentencias 51237 de 4 de diciembre 2013 y 40.200 de 2015.

4. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Pretendía el señor JORGE ELIECER ARBOLEDA TABORDA a través del presente proceso controvertir el porcentaje de pérdida de capacidad laboral que le fue otorgado por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia el 3 de febrero de 2005, para que efectos que le fuera restablecida la pensión de invalidez de origen profesional que le había sido inicialmente reconocida por el ISS- Riesgos profesionales y cuya extinción se ordenó al no acreditar la merma de capacidad laboral requerida.

Conforme se observa a folio 19 del expediente digitalizado, a través de Resolución 01248 del 5 de marzo de 1992 el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, le reconoció al demandante pensión de invalidez de origen profesional por haber sufrido un accidente de trabajo, a partir del 19 de noviembre de 1991, en aplicación del Decreto 3170 de 1964 por tener una incapacidad parcial del 21%.

El Decreto 3170 de 1964, que regulaba lo atinente a las prestaciones derivadas de accidentes o enfermedades de origen profesional para la época determinaba en su artículo 21:

“Artículo 21. El incapacitado permanente parcial tendrá derecho a una pensión proporcional a la que le hubiere correspondido en caso de incapacidad permanente total y de acuerdo con el porcentaje de valuación de la incapacidad.

Incapacitado permanente total tendrá derecho a una pensión mensual equivalente al 60% del salario mensual de base.

El incapacitado permanente absoluto tendrá derecho a una pensión mensual equivalente al 70% del salario mensual de base

El gran inválido tendrá derecho a una pensión equivalente al 85% del salario mensual de base.

En ningún caso las pensiones por incapacidad permanente total, absoluta, o gran invalidez, podrán ser inferiores a la que habría correspondido al asegurado en el Seguro de Invalidez no profesional. En caso de serlo, se elevará la pensión hasta el valor que le habría correspondido en el mencionado seguro.

Así mismo en sus artículos 23 y 24 disponía:

Artículo 23. Al declararse la incapacidad permanente, sea total o parcial, se concederá provisionalmente la pensión por un período inicial hasta de dos (2) años.

Si subsiste la incapacidad después de transcurrido tal periodo, la pensión tendrá carácter definitivo. Sin embargo el Instituto podrá efectuar la revisión de la incapacidad cuando lo estime necesario, si hubiera fundamento para presumir que han cambiado las condiciones que determinaron su otorgamiento.

Las pensiones serán vitalicias a partir de la edad mínima que para el derecho a pensión de vejez fija el Reglamento General del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte.(subrayas fuera de texto)

Artículo 24. El asegurado que quede con una incapacidad permanente parcial entre el 5 y el 20%, tendrá derecho a que se le pague en sustitución de la pensión, una indemnización en capital equivalente a dos (2) anualidades de aquella.

Las pensiones correspondientes a una reducción de capacidad de trabajo superior al 20% no podrán pagarse en forma de capital.

La incapacidad permanente parcial inferior al 5% no es indemnizable.

Lo anterior, significa que la norma conforme la cual se reconoció la pensión del actor, permitía al ISS revisar en cualquier momento si la incapacidad que originó la pensión de invalidez profesional subsistía, es decir, si continuaba siendo superior al 20%, toda vez que el estado de salud es cambiante y puede darse eventualmente una recuperación de la salud de la persona, pues de haber disminuido dicho porcentaje la pensión podría extinguirse por haber cambiado las condiciones que determinaron su otorgamiento. Potestad esta que posteriormente también fue incorporada en el artículo 44 de la Ley 100 de 1993 cuando dispuso:

ARTÍCULO 44. Revisión de las Pensiones de Invalidez. El estado de invalidez podrá revisarse:

a) Por solicitud de la entidad de previsión o seguridad social correspondiente cada tres (3) años, con el fin de ratificar, modificar o dejar sin efectos el dictamen que sirvió de base para la liquidación de la pensión que disfrutaba su beneficiario y proceder a la extinción, disminución o aumento de la misma, si a ello hubiere lugar.

Este nuevo dictamen se sujeta a las reglas de los artículos anteriores.

El pensionado tendrá un plazo de tres (3) meses contados a partir de la fecha de dicha solicitud, para someterse a la respectiva revisión del estado de invalidez. Salvo casos de fuerza mayor, si el pensionado no se presenta o impide dicha revisión dentro de dicho plazo, se suspenderá el pago de la pensión. Transcurridos doce (12) meses contados desde la misma fecha sin que el pensionado se presente o permita el examen, la respectiva pensión prescribirá.

Para readquirir el derecho en forma posterior, el afiliado que alegue permanecer inválido deberá someterse a un nuevo dictamen. Los gastos de este nuevo dictamen serán pagados por el afiliado;

b) Por solicitud del pensionado en cualquier tiempo y a su costa.

Según se verifica en los documentos allegados a folio 33 y 34 el ISS realizó una revisión del estado de invalidez del señor JORGE ELIECER ARBOLEDA el 3 de septiembre de 2001 determinando que la pérdida de capacidad laboral de origen profesional con base en las secuelas de fractura de L3 era del 14.6%. Dicha calificación fue apelada ante la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia, que por medio de dictamen del 14 de marzo de 2002 se evaluó la fractura consolidada y funcional de L3 determinando que la pérdida de capacidad laboral del actor era del 21%, merma que le permitía al demandante conservar la pensión de invalidez.

Luego, el 28 de junio de 2004, el ISS realizó una nueva revisión al demandante, determinado que tenía una pérdida de capacidad laboral del 15%, anotando como sustentación: "SUFRIÓ FRACTURA DE L3 (30%) HOY SIN MATERIOR DE O.S.VC Y EMG NORMAL, HA MEJORADO EN FORMA SIGNIFICATIVA"

Según se lee en la Resolución No. 1386 del 3 de diciembre de 2007 visible a folio 22, el dictamen anterior fue apelado por lo que la Junta Regional de Calificación de Invalidez emitió el dictamen No. 0014458 del 3 de febrero de 2005, señalando que el asegurado tenía una pérdida de capacidad laboral del 17.170%, razón por la cual el ISS- Riesgos Laborales a través de la Resolución en mención decidió confirmar la Resolución No. 1190 de 2007 a través de la cual se ordenó la extinción de la pensión de invalidez del señor JORGE ELIECER ARBOLEDA TABORDA por tener una pérdida de capacidad laboral inferior al 20%.

Y es precisamente el dictamen emitido el 3 de febrero de 2005 el que pretendía la parte actora que se declarara nulo a través del presente proceso, a pesar de que el mismo ni siquiera fue allegado y solo se tiene referencia del porcentaje asignado por la mención que hace el ISS en la aludida resolución que ordenó la extinción del derecho pensional del accionante.

Bajo este contexto y antes de adentrarnos a analizar el tema que comporta objeto de estudio por parte de la Sala, es importante precisar algunos aspectos sobre la competencia para realizar dictámenes mediante los cuales se emite un concepto técnico sobre pérdida de capacidad laboral.

El artículo **41 de la Ley 100 de 1993**, modificado por el artículo 142 del Decreto 19 de 2012, reza:

“Corresponde al Instituto de Seguros Sociales, Administradora Colombiana de Pensiones -COLPENSIONES-, a las Administradoras de Riesgos Profesionales-ARP-, a las Compañías de Seguros que asuman el riesgo de invalidez y muerte, y a las Entidades Promotoras de Salud EPS, determinar en una primera oportunidad la pérdida de capacidad laboral y calificar el grado de invalidez y el origen de estas contingencias. En caso de que el interesado no esté de acuerdo con la calificación deberá manifestar su inconformidad dentro de los diez (10) días siguientes y la entidad deberá remitirlo a las Juntas Regionales de Calificación de Invalidez del orden regional dentro de los cinco (5) días siguientes, cuya decisión será apelable ante la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, la cual decidirá en un término de cinco (5) días. Contra dichas decisiones proceden las acciones legales.”

En ese sentido se destaca la importancia que tienen dichos conceptos, dado que en principio constituyen el fundamento para que las entidades que administran el Sistema de Seguridad Social deciden sobre el reconocimiento y pago de determinadas prestaciones económicas a las que podría tener derecho el afiliado, sin que sea admisible, sin fundamento alguno, apartarse de su contenido.

Así las cosas, el dictamen que emite la Junta Nacional de Calificación de Invalidez como órgano de cierre no tiene ningún recurso, solamente existe la posibilidad de rebatir su contenido dentro de un proceso ordinario laboral, escenario en el que, debiendo mediar razones atendibles, se intentan contrariar los conceptos que sobre el tema hayan emitido los órganos competentes.

En el caso de autos, se pretende controvertir el dictamen emitido por la JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ, en cual quedó en firme por no haberse apelado en forma oportuna, por ello, tanto la parte actora como el a quo contaban con la opción de solicitar la realización de una pericia para efectos de analizar por quien fungiría como auxiliar de la justicia la merma de la capacidad laboral, dado que si un concepto administrativo atara al operador jurídico carecería de sentido la intervención de la jurisdicción laboral, razonamiento plasmado por la Sala de Casación Laboral en sentencias como las de radicación 29.328, reiterada en la 29.622 y 31.062, que al referirse al tema señaló que por ello es necesario que el fallador, para efectos de definir el estado de invalidez objeto de controversia, acuda al apoyo de un ente especializado en la materia, al no contar con la potestad de dictaminar en forma definitiva, sin el apoyo de los conocedores de la materia, si un trabajador está realmente incapacitado o no y cuál es la

etiología de su mal, como tampoco cuál es el grado de la invalidez, ni la distribución porcentual de las discapacidades y minusvalías, así como la fecha en que se estructuró esa disminución.

Y es precisamente la distribución porcentual el asunto sobre el que se edificó inicialmente esta controversia, dado que la JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE ANTIOQUIA le asignó al actor una pérdida de capacidad laboral del 17.70% a través del dictamen No. 0014458 del 3 de febrero de 2005.

Ahora, dentro del proceso se decretó como prueba de oficio el dictamen de pericial, mismo que fue allegado por la parte actora e incorporado a folios 132/136, emitido por la IPS JUNTA MEDICO LABORAL S.A.S., en el cual se determinó que el señor JORGE ELIECER ARBOLEDA tiene una pérdida de capacidad laboral del 38.48% con fecha de estructuración del 28 de agosto de 2014 de origen común. Sin embargo, al observar dicho dictamen este no sirve para controvertir el dictamen de la JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ, pues en primer lugar en este se califica la patología como común y con una fecha de estructuración muy posterior al accidente laboral sufrido por el actor el 21 de diciembre de 1990 que fue el que dio origen a la incapacidad parcial con la que se reconoció la pensión de invalidez con base en el Decreto 3170 de 1964.

Aunado a lo anterior en este dictamen solo tienen en cuenta las patologías HIPERTENSIÓN ESCENCIAL y ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA, aclarando que "PARA EFECTO DE ESTA CALIFICACIÓN SOLO SE TENDRÁ EN CUENTA LA PATOLOGÍA DE DISCOPATÍA Y DOLOR LUMBAR YA QUE SON SECUNDARIAS A (ACCIDENTE DE TRABAJO) YA CALIFICADO E INDEMNIZADO POR RIESGOS LABORALES", lo que significa que en esta oportunidad no se tuvo en cuenta la establecer la pérdida de capacidad laboral la patología que había originado la merma de capacidad laboral que dio lugar a la pensión de invalidez profesional y por tanto el porcentaje allí asignado obedece a nuevas enfermedades de origen común, no a la lesión que sufrió el actor con causa del accidente profesional, por lo que no podría reactivarse la pensión de origen profesional con base en el mismo, pues en este nada se estableció frente a si estas patologías aún generaban en el señor ARBOLEDA TABORDA un grado de pérdida de capacidad laboral igual o superior al 20% para poder predicar que aún cumple los requisitos del Decreto 3170 de 1964, norma con la que le fue inicialmente reconocida la prestación.

Así mismo, con la demanda se allegó un dictamen que fue realizado por COLPENSIONES el 5 de diciembre de 2014, visible a folios 26/28, en el cual se determinó que el señor JORGE

ELIECER ARBOLEDA tenía una pérdida de capacidad laboral del 31.63% de origen común con fecha de estructuración 3 de octubre de 2014. El cual tampoco es conducente para controvertir el dictamen de la JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ, pues, al igual que el anterior, también califica la pérdida de capacidad laboral como de origen común y estructurada en 2014 e igualmente solo tuvo en cuenta los diagnósticos HIPERTENSIÓN ARTERIAL y ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA, aclarando que “PARA EFECTO DE ESTA CALIFICACIÓN SOLO SE TENDRÁ EN CUENTA LA PATOLOGÍA RESPIRATORIA YA QUE SU DISCOPATÍA Y DOLOR LUMBAR ES SECUNDARIO A FX ANTIGUA YA CALIFICADO E INDEMNIZADO POR RIESGOS LABORALES”, lo que significa que en esta oportunidad tampoco se tuvo en cuenta para establecer el porcentaje de pérdida de capacidad laboral la patología que originó inicialmente la incapacidad del demandante y con la cual se le reconoció la pensión de invalidez, que después le fue extinguida.

De otro lado, no es cierto como lo indicó el a quo que este dictamen haya sido apelado y que el recurso haya sido resuelto por la JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN el 2 de marzo de 2014, pues el dictamen que obra a folio 34, al que hizo referencia el juez de primera instancia, realmente corresponde al dictamen emitido el 14 de marzo de 2002, sino que al parecer el juez leyó mal la fecha, como se ve:

34

REPUBLICA DE COLOMBIA
JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE ANTIOQUIA
DICTAMEN PARA CALIFICACIÓN DE LA PÉRDIDA DE LA CAPACIDAD LABORAL
INFORMACIÓN GENERAL DEL DICTAMEN

Dictamen Número:	6	0	6	2	Fecha Recepción Solicitud:	DD	MM	AA
Entidad Remitente:	A.R.P. I.S.S.				Fecha del Dictamen:	14	03	02

2. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD CALIFICADORA

Nombre de la Entidad Administradora: A.R.P. I.S.S.
Dirección:
Teléfono:

3. DATOS PERSONALES DEL CALIFICADO

Apellidos: ARBOLEDA TABORDA
Nombres: JORGE ELIECER
Documento de Identidad: C.C. X T.I. C.E. Otro No. 3.395.851
Fecha de Nacimiento: MAYO 20 DE 1960 Años 41 AÑOS
Género: Masculino X Femenino N° de hijos: 2 HIJOS
Estado Civil: Soltero Casado X Viudo U.Libre Separado Otro
Escolaridad: Primaria Secundaria X Técnica Unvers. Analfabeta Otro
Dirección: VEREDA PARTE ALTA Teléfono: 847 39 65
Municipio: AMAGA Departamento: ANTIOQUIA

4. ANTECEDENTES LABORALES DEL CALIFICADO

4.1 DESCRIPCIÓN DEL CARGO ACTUAL

Nombre de la Empresa:	
Actividad Económica de la Empresa:	
Denominación del Cargo Actual:	
Antigüedad en la Empresa:	
Antigüedad en el Cargo:	
Descripción de las Tareas del Cargo:	

4.1 ANTECEDENTES DE EXPOSICIÓN LABORAL

EMPRESAS	CARGOS	RIESGOS	TIEMPO DE EXPOSICIÓN
MINA	BARRETERO		1 AÑO

5. FUNDAMENTOS DE LA CALIFICACIÓN

Además no resulta lógico afirmar que este dictamen fue proferido el 2 de marzo de 2014, pues el dictamen de Colpensiones del que supuestamente resuelve la apelación, según el a quo, fue proferido el 5 de diciembre de 2014, es decir, que no podría haberse resuelto el recurso en fecha anterior.

Por tanto este claro que se trata del dictamen emitido el 14 de marzo de 2002 cuando se resolvió el recurso de apelación contra el del 3 de septiembre de 2001 y se determinó que el actor tenía una pérdida de capacidad del 21%, por lo que no puede desconocerse que con posterioridad a esta fecha el ISS volvió a calificar al señor ARBOLEDA TABORDA el 28 de junio de 2004 determinando que la misma disminuyó al **15%** y la Junta Regional determinó el 3 de febrero de 2005 que era del **17.70%**, razón por la que se le extinguió el derecho pensional.

Por tanto, estima la Sala que contrario a lo que concluyó el a quo, dentro del proceso no se demostró que existieran razones para declarar la nulidad del dictamen No. 0014458 del 3 de febrero de 2005 proferido por la JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE ANTIOQUIA que determinó que el señor JORGE ELIECER ARBOLEDA TABORDA presenta una pérdida de capacidad laboral del 17.70% por patologías de origen profesional, pues en primer lugar al proceso ni siquiera se allegó el aludido dictamen, del que solo se tiene referencia porque el ISS lo menciona en la Resolución No. 1386 de 2007, por lo que ni siquiera es posible analizar las razones que tuvo en su momento la Junta para determinar que el estado de salud del actor había presentado mejoría desde el dictamen que se había practicado el 14 de marzo de 2002 cuando se le había calificado un 21%.

Además dentro del proceso no se allegó ninguna prueba técnica ni científica que pudiera controvertir el porcentaje asignado por la JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE ANTIOQUIA dado que los dictámenes que fueron realizados al actor con posterioridad al dictamen controvertido y que fueron aportados con la demanda y como prueba pericial, es decir, el realizado por COLPENSIONES y por la IPS JUNTA MEDICO LABORAL, se realizaron solo frente a patologías de origen común como lo son la HIPERTENSIÓN ARTERIAL Y LA ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA, haciendo claridad en ambos que no se tuvo en cuenta la discopatía y dolor lumbar secundarios a fractura antigua de columna que fue calificada e indemnizada por riesgos laborales, es decir, que ninguna de estas entidades calificó las secuelas del accidente de trabajo para verificar si la pérdida de capacidad laboral continuaba siendo superior al 20% con el fin de acreditar los requisitos del Decreto 3170 de 1964 para que le pudiera ser reactivada la pensión de invalidez que inicialmente le había sido reconocida. Pese a

esto la parte actora, no apeló el dictamen de COLPENSIONES ni pidió aclaración o complementación del emitido por la IPS JUNTA MEDICO LABORAL para que le fueran calificadas las patologías de origen profesional.

Luego, la Sala no cuenta con elementos técnicos para declarar la nulidad del dictamen No. 0014458 del 3 de febrero de 2005 proferido por la JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE ANTIOQUIA, pues no es de resorte del operador jurídico examinar asuntos tan técnicos como este, precisamente se vale de especialistas en la materia para efectos de esclarecer los hechos objetos de controversia. Así lo consagra la ley estatutaria de administración de justicia, Ley 270 de 1996, cuando se refiere a la conformación de las listas de auxiliares como apoyo a los falladores dados sus conocimientos técnicos y científicos, con medios idóneos para la calificación a partir de un grupo interdisciplinario.

En consecuencia esta Magistratura no encuentra razones atendibles para desconocer el concepto técnico, pues aunado a ello tampoco se cuenta con los conocimientos técnicos para rebatir las conclusiones a las que llegó la JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE ANTIOQUIA respecto al porcentaje de pérdida de capacidad laboral asignado al actor, no siendo posible determinar un porcentaje de pérdida de capacidad laboral diferente, pues se insiste, el juez no tiene los conocimientos técnicos para ello.

Así las cosas, habrá de **REVOCARSE** la decisión de primera instancia que declaró la nulidad del dictamen No. 0014458 del 3 de febrero de 2005 proferido por la **JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE ANTIOQUIA** y consecuentemente también se **REVOCARÁ** la condena al restablecimiento del derecho a la pensión de invalidez que le fuera otorgada al señor **JORGE ELIECER ARBOLEDA TABORDA** mediante Resolución 01248 del 5 de marzo de 1992, debiéndose **ABSOLVER** a las demandadas de todas las pretensiones formuladas en su contra.

Por consiguiente la sentencia de primera instancia será **REVOCADA** en su integridad y en su lugar se **ABSOLVERÁ** a las demandadas de todas las pretensiones formuladas en su contra.

Costas en ambas instancias a cargo del demandante. En esta instancia se fijan las agencias en derecho en la suma de \$100.000 a favor de ambas demandadas.

4. DECISIÓN DEL TRIBUNAL

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Tercera de Decisión Laboral, administrando justicia en el nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

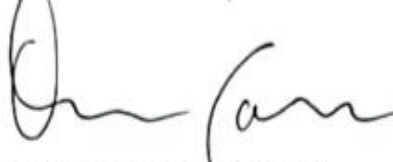
DECIDE

PRIMERO: CONFIRMA PARCIALMENTE la sentencia proferida por el Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Medellín el 15 de octubre de 2020, dentro del proceso ordinario promovido por el señor **JORGE ELIECER ARBOLEDA TABORDA** identificado con la cédula de ciudadanía Nro. 3.395.851 contra **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES- UGPP** y la **JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE ANTIOQUIA**, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

SEGUNDO: Costas en ambas instancias a cargo del demandante. En esta instancia se fijan las agencias en derecho en la suma de \$100.000 a favor de ambas demandadas

Lo anterior se notificará por **EDICTO** que se fijará por la Secretaría por el término de un día.

Los Magistrados
(Firmas escaneadas)



ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA



MARIA NANCY GARCÍA GARCÍA



MARTHA TERESA FLOREZ SAMUDIO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
SALA LABORAL



SECRETARÍA

EDICTO

El Secretario de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín:

HACE SABER:

Que se ha proferido sentencia en el proceso que a continuación se relaciona:

Demandante: **JORGE ELIECER ARBOLEDA TABORDA**
Demandados: **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y
CONTRIBUCIONES PARAFISCALES- UGPP y JUNTA REGIONAL DE
CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE ANTIOQUIA**
Radicado No.: **05001-31-05-009-2016-01352-01**
Decisión: **REVOCA Y ABSUELVE**
Fecha de la sentencia: **30/01/2023/**

El presente edicto se fija en la página web institucional de la Rama Judicial <https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/148> por el término de un (01) día hábil, con fundamento en lo previsto en el artículo 41 del CPTSS, en concordancia con el artículo 40 *ibidem*. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

Se fija hoy **31/01/2023** desde las 08:00 am. y se desfija a las 05:00 pm.

RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
Secretario